

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 1138
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2019-00465-00
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE: LUZ DARY ROJAS MONCADA
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: Libra mandamiento de pago

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

I. ASUNTO

Se decide sobre el pedimento de librar mandamiento ejecutivo en los términos solicitados en la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES

La señora Luz Dary Rojas Moncada, por conducto de apoderado especial, en demanda ejecutiva, formuló las siguientes pretensiones (fls. 1 a 10):

“Se libre mandamiento ejecutivo de pago, a favor de la señora LUZ DARY ROJAS MONCADA y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (de ahora en adelante UGPP), representada legalmente por la Doctora GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, y/ o a quien haga sus veces o quien ella designe por los siguientes conceptos y sumas de dinero relacionados a continuación:

- 1. Por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (11.963.709,32 MCTE), por concepto de la diferencia de las sumas descontadas por aportes y ordenados dentro del proceso de la referencia, mediante sentencia del 27 de junio de 2014, proferida por el juzgado veintisiete administrativo oral del circuito de Bogotá-Sección segunda, que dispuso en el resuelve: (...) Igualmente, se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar (...), confirmada por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda – subsección “A”, mediante sentencia del 30 de junio de 2016.*
- 2. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a pensión del CINCO por ciento (5%) de aportes que estimaba la normatividad vigente (ley 4ª de 1966, ley 33 de 1985), del tiempo laborado entre el 07 de mayo de 1987 y 31 de marzo de 1994.*
- 3. Se realice la liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del once punto cinco por ciento (11.5%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de diciembre de 1994.*
- 4. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del doce punto cinco por ciento (12.5%) de aportes en los términos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de diciembre de 1995.*
- 5. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del trece punto cinco por ciento (13.5%) de aportes en los términos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2003.*

6. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del catorce punto cinco por ciento (14.5%) de aportes en los términos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de octubre de 2004.

7. Por los intereses moratorios de los dineros que por concepto de la diferencia de la suma descontadas arbitrariamente por la UGPP y ordenados dentro del proceso de la referencia, mediante sentencia del 30 de junio de 2016. Causados desde el día siguiente del pago del retroactivo, hasta la fecha en que se cancele la suma, equivocadamente descontada.

8. Se condene en costas a la parte demandada”.

Allegó como base del recaudo compulsivo copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 27 de junio de 2014 por este Juzgado y el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en el proceso No. 11001-33-35-027-2013-00283-00, con constancia de ejecutoria del 9 de agosto de 2016.

No obstante, en proveído del 13 de julio de 2020 (fl. 82), el juzgado advirtió que la sentencia de segundo grado fue dejada sin valor ni efecto por el Consejo de Estado dentro de la acción de tutela No. 11001031500020170001101, razón por la cual se ordenó el desarchivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-027-2013-00283-00 y en él se encontró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una nueva sentencia el 29 de junio de 2017, en cumplimiento de la orden impartida por el juez de tutela mediante fallo del 15 de junio de 2017, providencia que confirmó la de primera instancia y quedó ejecutoriada el **14 de julio de 2017**, según constancias expedidas por el Oficial Mayor de la mencionada Subsección A y la Secretaría del juzgado (fls. 245 del exp. 2013-00283-00 y 84 del exp. 2019-00465-00).

Igualmente, aportó copia auténtica de la Resolución No. RDP 040123 del 23 de octubre de 2017, por la cual el Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social re-liquidó la pensión de vejez de la señora Luz Dary Rojas Moncada, en cumplimiento de las sentencias objeto de ejecución (fls. 44 a 55); de los certificados de factores salariales expedidos por el Coordinador del Grupo de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales consta que en el periodo de 1987 a 2004 la ejecutante devengó asignación básica, subsidio de alimentación, prima de servicios, bonificación por servicios, prima de vacaciones y prima de navidad (fls. 69 a 74); y de la liquidación de la condena impuesta en las sentencias que sirven de título ejecutivo y sus deducciones, remitida mediante oficio No. 1631 del 16 de octubre de 2018 (fls. 75 a 79).

Subsanados los defectos de la demanda advertidos mediante auto del 18 de marzo de 2021 (fls. 90 a 102), corresponde estudiar los presupuestos legales del mandamiento ejecutivo.

III. CONSIDERACIONES

El artículo 104, numeral 6, del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) prevé que esta jurisdicción está instituida para conocer de los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y conciliaciones aprobadas por la jurisdicción; al paso que el artículo 297, numerales 1 y 2 *ídem*, dispone que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias y las decisiones en firme dictadas en desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible; mientras que el artículo 215, inciso 2 *ejusdem* consagra que cuando se trate de un título ejecutivo, el documento que lo contenga deberá cumplir los requisitos exigidos en la ley.

Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso (en adelante CGP), aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA., dispone que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan

del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, y los demás documentos que señale la ley; al paso que el artículo 114, numeral 2 *ídem* consagra que las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de ejecutoria.

A su turno, el artículo 430 *ejusdem* prevé que presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

Nótese, que tales preceptos consagran que la obligación objeto de recaudo por la vía compulsiva debe ser clara, vale decir, fácilmente inteligible y entendida en un solo sentido y, si es una suma de dinero, debe ser determinada o determinable mediante una simple operación aritmética, de tal forma que haya certeza sobre su monto, pues de no ser así no reuniría esta condición esencial del título ejecutivo y, por tal motivo, no sería susceptible de cobro forzado.

También debe ser expresa, esto es, que debe constar en forma nítida el crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado, o aparezca manifiesta de la redacción del título, sin que para ello haya que acudir a elucubraciones o suposiciones, por lo que faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógicos jurídicos o sea considerada una consecuencia implícita.

Por último, debe ser exigible, es decir, que puede demandarse su cumplimiento por no estar pendiente de plazo o condición, o sea, vencido el primero o acaecida la segunda o, si se trata de una obligación pura y simple (no está sometida a plazo o condición), su exigibilidad opera previo requerimiento al deudor, el cual se suple con la notificación del mandamiento ejecutivo (art. 423 CGP).

Ahora bien, como el título ejecutivo lo constituyen las sentencias de primera y segunda instancia dictadas el 27 de junio de 2014 por este Juzgado y el 29 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con la respectiva constancia de ejecutoria, y la parte demandante justificó la acción ejecutiva en que la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento a tales providencias, resulta forzoso determinar si la obligación que la actora persigue en este ámbito procesal cumple los requisitos de procedibilidad de la acción ejecutiva y si están reunidos los presupuestos formales y sustanciales que se requieren para librar el mandamiento de pago deprecado.

En primer lugar, es innegable que la demanda ejecutiva fue presentada después de los diez (10) meses, contados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de segundo grado, toda vez que esta quedó en firme el 14 de julio de 2017 (fl. 84) y aquella fue radicada el 27 de noviembre de 2019 (fl. 1); y además no operó la caducidad de la acción, en la medida en que la exigibilidad de la obligación reclamada se materializó el 15 de mayo de 2018 y, por tanto, el término de los cinco años vencería el 15 de mayo de 2023.

En segundo lugar, el título aportado como base de recaudo forzoso satisface las exigencias formales, si se tiene en cuenta que las sentencias objeto de ejecución fueron allegadas en copia auténtica y con la constancia de ejecutoria, de modo que cumple las previsiones del inciso 2 del artículo 215 del CPACA y el numeral 2 del artículo 114 del CGP.

En tercer lugar, la obligación perseguida es expresa, clara y actualmente exigible.

Es expresa, dado que aparece manifiesta en la parte resolutive de la providencia de primer grado, confirmada por la sentencia de segundo grado, que a título de restablecimiento del derecho dispuso:

"(...) TERCERO. Como consecuencia de la anterior ORDENASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – U.G.P.P., reliquidar en debida forma, reconocer y pagar a la actora el valor de la pensión de jubilación de la parte actora equivalente

al 75% del promedio de todos los salarios devengados, teniendo en cuenta en forma proporcional la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios (Sueldo, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones), esto es, del 31 de octubre de 2003 a 31 de octubre de 2004, a partir del 04 de septiembre de 2004, pero con efectos fiscales a partir del 07 de junio de 2009, por prescripción trienal, aplicando los reajustes legales sobre las sumas resultantes.

Al momento de hacer la liquidación para pagar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido. **Igualmente, se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar.**

CUARTO. La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la siguiente fórmula:

$$R = R.H. \frac{\text{INDICE FINAL}}{\text{INDICE INICIAL}}$$

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de emolumentos salariales y prestacionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período, como se indicó en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO. Se ordena dar cumplimiento a esta providencia con observancia de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA (...).

Lo anterior significa que en los documentos arrimados como título compulsivo consta en forma nítida un crédito a favor de la ejecutante y una deuda a cargo de la ejecutada, por concepto de re-liquidación de la pensión de vejez con la inclusión de los nuevos factores salariales devengados en el último año de servicios (prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones), partidas sobre las cuales se deducirían los aportes al sistema de pensiones durante el período en el cual fueron percibidas, debidamente indexados, pues las sentencias objeto de ejecución no determinaron que frente a tales cotizaciones operó la prescripción trienal o quinquenal, como lo sugiere la parte demandante, y tampoco fue impugnada ni objeto de aclaración o adición por ese motivo.

Es clara, en tanto es inteligible, pues fue cuantificada con la liquidación de la condena que la parte demandante efectuó en el escrito de subsanación de la demanda (fls. 90 a 102).

Es exigible, en la medida en que las sentencias invocadas como título ejecutivo quedaron ejecutoriadas el 14 de julio de 2017 y el término de diez (10) meses previsto en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA expiró el 15 de mayo de 2018, de suerte que la exigibilidad de la obligación en ellas contenida se consumó a partir de esta fecha y desde entonces la acreedora quedó habilitada para promover su ejecución ante esta jurisdicción, lo cual hizo antes de vencerse el término de caducidad de los cinco (5) años (15 de mayo de 2023).

Recapitulando, la obligación perseguida por la actora consiste en el pago de las diferencias pensionales derivadas de la re-liquidación ordenada en las sentencias objeto de ejecución que le dejó de cancelar la UGPP porque le descontó un mayor valor por concepto de aportes al sistema de pensiones sobre los factores salariales adicionales que se incluyeron en el ingreso base de liquidación, esto es, la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, pues adujo que el monto a deducir era de \$1'677.677,68 y no de \$13'641.387, como lo hizo, de modo que el saldo insoluto asciende a \$11'963.709,32.

No obstante, se advierte que la orden de pago solicitada en el libelo compulsivo no se ajusta a las normas legales aplicables a la sentencia objeto de ejecución, motivo por el cual y en atención a lo prescrito en el artículo 430 del CGP se procederá a librar el mandamiento ejecutivo en la forma que legalmente corresponde.

En primer lugar, no es procedente tener al Ministerio de Salud y de la Protección Social como tercero interesado en este trámite ejecutivo, en la medida en que, si bien fungió como empleador de la actora, las sentencias objeto de ejecución no le son vinculantes, si se tiene en cuenta que no intervino en el proceso ordinario en el cual se dictaron tales providencias.

En segundo lugar, en cuanto a la tasa de cotización, se recuerda que el artículo 2 de la Ley 4ª de 1966 dispuso que la correspondiente a los trabajadores sería del 5% del salario mensual, el cual se mantuvo invariable en el Decreto 1089 de 1983, que aprobó el Acuerdo 32 de 1983 de la Caja Nacional de Previsión, y en la Ley 33 de 1985, mientras que la correspondiente a los empleadores sería del 8%, sin discriminar en el caso de los empleados la proporción asignada a salud y a pensión.

Posteriormente, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 previó que la tasa de cotización para la pensión de vejez sería del 8% en 1994, 9% en 1995 y 10% en 1996, calculada sobre el ingreso base, más el 3,5% de gastos de administración del sistema, para una tasa total del 11,5%, 12,5% y 13,5%, respectivamente, y a partir del 1 de abril de 1994, fecha en la cual entró a regir el sistema general de pensiones, los empleadores debían asumir el 75% y los trabajadores el 25% del pago de la cotización total.

El artículo 7 de la Ley 797 de 2003 subrogó el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, y prescribió que a partir del 1º de enero de 2004 la tasa de cotización se incrementaría en uno por ciento (1%) sobre el IBC, desde el 1º de enero de 2005 en medio por ciento (0,5%) adicional, a partir del 1º de enero de 2006 en otro medio por ciento (0,5%), y desde el 1º de enero de 2008 el Gobierno Nacional podría aumentarla en un punto adicional (1%) siempre y cuando el crecimiento del PIB fuere igual o superior al 4% durante los dos (2) años anteriores. También reiteró que el empleador continuaría pagando el 75% de la cotización total y el trabajador el 25% restante.

En tercer lugar, con base en los certificados de conceptos laborales devengados expedidos el 29 de octubre de 2018 por el Coordinador del Grupo de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales se indican los valores pagados a la actora por concepto de prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones, durante el periodo comprendido entre el mes de mayo de 1987 y el mes de octubre de 2004, factores salariales sobre los cuales no se efectuaron en su momento los descuentos por concepto de cotizaciones al sistema general de pensiones (fls. 70 a 74), se procederá a liquidar su monto con su respectiva indexación. Veamos:

1. Cálculo del monto de los aportes de la actora al sistema general de pensiones sobre los nuevos factores salariales incluidos en la re-liquidación pensional que percibió durante su vinculación laboral, indexados desde que se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria de las sentencias objeto de ejecución (14 de julio de 2017)

AÑO	MES	FACTORES SALARIALES ADICIONALES	VALOR PAGADO	TASA DE COTIZACIÓN	PORCENTAJE DE APOORTE A CARGO DEL TRABAJADOR	APOORTE PENSIÓN TRABAJADOR	INDICE FINAL (14 DE JULIO DE 2017)	INDICE INICIAL (FECHA CAUSACIÓN)	VALOR INDEXADO
1987	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 36.295	5%	5%	\$ 1.815	96,18	3,58	\$ 48.755
1988	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	40.177	5%	5%	2.009	96,18	4,17	46.334
	JULIO	PRIMA DE SERVICIOS	40.177	5%	5%	2.009	96,18	4,33	44.622
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	87.050	5%	5%	4.353	96,18	4,58	91.403
1989	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	51.915	5%	5%	2.596	96,18	5,21	47.919
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	50.241	5%	5%	2.512	96,18	5,28	45.759
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	108.994	5%	5%	5.450	96,18	5,78	90.684

1990	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	63.956	5%	5%	3.198	96,18	6,68	46.042
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	61.863	5%	5%	3.093	96,18	6,81	43.685
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	134.210	5%	5%	6.710	96,18	7,65	84.368
1991	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	78.660	5%	5%	3.933	96,18	8,78	43.084
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	75.514	5%	5%	3.776	96,18	8,92	40.711
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	163.875	5%	5%	8.194	96,18	9,7	81.245
1992	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	94.797	5%	5%	4.740	96,18	11,18	40.776
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	95.751	5%	5%	4.788	96,18	11,43	40.286
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	207.382	5%	5%	10.369	96,18	12,14	82.150
1993	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	124.677	5%	5%	6.234	96,18	13,66	43.892
	MAYO	PRIMA DE SERVICIOS	119.689	5%	5%	5.984	96,18	13,66	42.137
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	259.743	5%	5%	12.987	96,18	14,89	83.889
1994	JULIO	PRIMA DE SERVICIOS	215.538	11,5%	2,875%	6.197	96,18	17,23	34.591
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	449.038	11,5%	2,875%	12.910	96,18	18,25	68.037
1995	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	551.808	12,5%	3,125%	17.244	96,18	21,8	76.079
1996	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	305.626	13,5%	3,375%	10.315	96,18	24,58	40.362
	JULIO	PRIMA DE SERVICIOS	295.029	13,5%	3,375%	9.957	96,18	25,24	37.942
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	640.113	13,5%	3,375%	21.604	96,18	26,52	78.351
1997	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	741.083	13,5%	3,375%	25.012	96,18	31,21	77.080
1998	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	411.224	13,5%	3,375%	13.879	96,18	35,19	37.934
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	861.335	13,5%	3,375%	29.070	96,18	36,42	76.770
1999	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	477.052	13,5%	3,375%	16.101	96,18	38,7	40.015
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	460.511	13,5%	3,375%	15.542	96,18	38,81	38.517
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	999.152	13,5%	3,375%	33.721	96,18	39,79	81.510
2000	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	479.699	13,5%	3,375%	16.190	96,18	42,57	36.579
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	460.511	13,5%	3,375%	15.542	96,18	42,56	35.123
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	92.242	13,5%	3,375%	3.113	96,18	43,27	6.920
2001	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	523.976	13,5%	3,375%	17.684	96,18	45,92	37.039
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	503.017	13,5%	3,375%	16.977	96,18	45,94	35.543
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	1.186.981	13,5%	3,375%	40.061	96,18	46,58	82.719

2002	MAYO	PRIMA DE VACACIONES	612.919	13,5%	3,375%	20.686	96,18	48,6	40.938
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	588.879	13,5%	3,375%	19.875	96,18	48,81	39.164
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	1.277.908	13,5%	3,375%	43.129	96,18	49,83	83.246
2003	JUNIO	PRIMA DE VACACIONES	654.578	13,5%	3,375%	22.092	96,18	52,33	40.604
	JUNIO	PRIMA DE SERVICIOS	630.041	13,5%	3,375%	21.264	96,18	52,33	39.082
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	1.367.134	13,5%	3,375%	46.141	96,18	53,07	83.622
2004	MAYO	PRIMA DE SERVICIOS	55.911	14,5%	3,625%	2.027	96,18	55,17	3.534
	OCTUBRE	PRIMA DE VACACIONES	698.887	14,5%	3,625%	25.335	96,18	55,66	43.779
TOTAL							\$2'382.819		

En consecuencia, los aportes al sistema general de pensiones que las sentencias objeto de ejecución ordenaron descontar sobre los nuevos factores salariales que se incluyeron en el ingreso base de liquidación que se tuvo en cuenta para re-liquidar la pensión de vejez de la demandante, debidamente indexados desde cuando se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria, ascienden a \$2'382.819, mientras que la deducción efectuada por la UGPP por el mismo concepto en la Resolución No. RDP 040123 del 23 de octubre de 2017 fue de \$13'641.387, de modo que se le descontó en exceso la suma de \$11'258.568, diferencia que debe ser restituida a la actora con los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se pague totalmente la obligación.

2. Cálculo de los intereses moratorios causados sobre el saldo insoluto desde el día siguiente a la ejecutoria de las sentencias (15 de julio de 2017) hasta el día anterior a la presente providencia (14 de octubre de 2021)

El artículo 192 del CPACA prescribe que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y, para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada; y las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, y cumplidos tres (3) meses desde esta fecha, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

El artículo 195 *ibídem* prevé que las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria, y una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso 2 del artículo 192 *ejusdem*, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.

El artículo 884 del Código de Comercio prevé que cuando en un negocio mercantil haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. El interés bancario corriente se probará con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria (actualmente Financiera).

En el presente caso, la parte ejecutante no probó que haya cumplido con la carga procesal de que trata el artículo 192 del CPACA, toda vez que no allegó copia de la solicitud de

cumplimiento de la sentencia con la correspondiente constancia de radicación y en el acto administrativo que la acató no se indicó tal hecho, de manera que se causaron intereses moratorios durante los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria, es decir, entre el 15 de julio de 2017 y el 15 de octubre de 2017, y como el 14 de febrero de 2018 el apoderado de la demandante pidió la modificación de la Resolución No. RDP 040123 del 23 de octubre de 2017 para que se acatara cabalmente la sentencia en firme, se tomará ese día como fecha de cumplimiento de esa carga, de suerte que los réditos resarcitorios a la tasa de DTF dejaron de generarse entre el 16 de octubre de 2017 y el 14 de febrero de 2018, y a partir del 15 de febrero de 2018 se reanudó su causación hasta el 15 de mayo de 2018, cuando venció el plazo de los diez (10) meses de que trata el artículo 195 del CPACA, y en adelante se generaron intereses moratorios a la tasa comercial.

2.1. Los intereses moratorios a la tasa de DTF se reflejan en el siguiente cuadro:

PERIODO		INTERÉS MENSUAL DTF	INTERÉS DIARIO DTF	NÚMERO DE DÍAS	CAPITAL ADEUDADO A LA EJECUTORIA	INTERÉS CAUSADO
DESDE	HASTA					
15-jul-17	31-jul-17	5,65%	0,01506%	17	\$ 11'258.568	\$ 28.822
1-ago-17	31-ago-17	5,58%	0,01488%	31	11'258.568	51.925
1-sep-17	30-sep-17	5,52%	0,01472%	30	11'258.568	49.724
1-oct-17	15-oct-17	5,46%	0,01457%	15	11'258.568	24.599
15-feb-18	28-feb-18	5,07%	0,01355%	14	11'258.568	21.359
1-mar-18	31-mar-18	5,01%	0,01339%	31	11'258.568	46.748
1-abr-18	30-abr-18	4,90%	0,01311%	30	11'258.568	44.270
1-may-18	15-may-18	4,70%	0,01258%	15	11'258.568	21.252
TOTAL INTERESES MORATORIOS A TASA DTF (15/05/18)						\$ 288.697

2.2. Los intereses moratorios a la tasa comercial se generaron desde el 16 de mayo de 2018 hasta el 14 de octubre de 2021 (día anterior a esta providencia), los cuales se reflejan en el siguiente cuadro:

PERIODO		RESOL UCIÓN No.	INTERÉS CORRIEN TE MENSUAL	INTERÉS DIARIO MORA	INTERÉS MENSUAL DE MORA	NÚMER O DE DÍAS	INTERÉS EFECTIVO ANUAL DE MORA	CAPITAL ADEUDADO A FECHA DE EJECUTORIA	INTERESES CAUSADOS
DESDE	HASTA								
16-may-18	31-may-18	527	20,44%	0,07329%	2,25359%	16	30,66%	\$ 11'258.568	\$ 132.031
1-jun-18	30-jun-18	687	20,28%	0,07279%	2,23792%	30	30,42%	11'258.568	245.856
1-jul-18	31-jul-18	820	20,03%	0,07200%	2,21339%	31	30,05%	11'258.568	251.296
1-ago-18	31-ago-18	1112	19,81%	0,07130%	2,19175%	31	29,72%	11'258.568	248.865
1-sep-18	30-sep-18	1112	19,81%	0,07130%	2,19175%	30	29,72%	11'258.568	240.837
1-oct-18	31-oct-18	1294	19,63%	0,07073%	2,17401%	31	29,45%	11'258.568	246.871
1-nov-18	30-nov-18	1521	19,49%	0,07029%	2,16019%	30	29,24%	11'258.568	237.404
1-dic-18	31-dic-18	1708	19,40%	0,07000%	2,15129%	31	29,10%	11'258.568	244.317
1-ene-19	31-ene-19	1872	19,16%	0,06924%	2,12752%	31	28,74%	11'258.568	241.645

1-feb-19	28-feb-19	111	19,70%	0,07096%	2,18091%	28	29,55%	11'258.568	223.681
1-mar-19	31-mar-19	263	19,37%	0,06991%	2,14832%	31	29,06%	11'258.568	243.984
1-abr-19	30-abr-19	389	19,32%	0,06975%	2,14337%	30	28,98%	11'258.568	235.575
1-may-19	31-may-19	574	19,34%	0,06981%	2,14535%	31	29,01%	11'258.568	243.650
1-jun-19	30-jun-19	697	19,30%	0,06968%	2,14139%	30	28,95%	11'258.568	235.359
1-jul-19	31-jul-19	829	19,28%	0,06962%	2,13941%	31	28,92%	11'258.568	242.982
1-ago-19	31-ago-19	1018	19,32%	0,06975%	2,14337%	31	28,98%	11'258.568	243.427
1-sep-19	30-sep-19	1145	19,32%	0,06975%	2,14337%	30	28,98%	11'258.568	235.575
1-oct-19	31-oct-19	1293	19,10%	0,06904%	2,12157%	31	28,65%	11'258.568	240.976
1-nov-19	30-nov-19	1474	19,03%	0,06882%	2,11462%	30	28,55%	11'258.568	232.446
1-dic-19	31-dic-19	1603	18,91%	0,06844%	2,10270%	31	28,37%	11'258.568	238.854
1-ene-20	31-ene-20	1768	18,77%	0,06799%	2,08877%	31	28,16%	11'258.568	237.287
1-feb-20	29-feb-20	94	19,06%	0,06892%	2,11760%	29	28,59%	11'258.568	225.012
1-mar-20	31-mar-20	205	18,95%	0,06856%	2,10667%	31	28,43%	11'258.568	239.301
1-abr-20	30-abr-20	351	18,69%	0,06773%	2,08080%	30	28,04%	11'258.568	228.765
1-may-20	31-may-20	437	18,19%	0,06612%	2,03083%	31	27,29%	11'258.568	230.769
1-jun-20	30-jun-20	505	18,12%	0,06589%	2,02382%	30	27,18%	11'258.568	222.561
1-jul-20	31-jul-20	605	18,12%	0,06589%	2,02382%	31	27,18%	11'258.568	229.980
1-ago-20	31-ago-20	685	18,29%	0,06644%	2,04085%	31	27,44%	11'258.568	231.896
1-sep-20	30-sep-20	769	18,35%	0,06664%	2,04685%	30	27,53%	11'258.568	225.069
1-oct-20	31-oct-20	869	18,09%	0,06580%	2,02081%	31	27,14%	11'258.568	229.641
1-nov-20	30-nov-20	947	17,84%	0,06499%	1,99570%	30	26,76%	11'258.568	219.498
1-dic-20	31-dic-20	1034	17,46%	0,06375%	1,95740%	31	26,19%	11'258.568	222.502
1-ene-21	31-ene-21	1215	17,32%	0,06329%	1,94325%	31	25,98%	11'258.568	220.909
1-feb-21	28-feb-21	64	17,54%	0,06401%	1,96547%	28	26,31%	11'258.568	201.791
1-mar-21	31-mar-21	161	17,41%	0,06359%	1,95235%	31	26,12%	11'258.568	221.934
1-abr-21	30-abr-21	305	17,31%	0,06326%	1,94224%	30	25,97%	11'258.568	213.672
1-may-21	31-may-21	407	17,22%	0,06297%	1,93313%	31	25,83%	11'258.568	219.769
1-jun-21	30-jun-21	509	17,21%	0,06294%	1,93211%	30	25,82%	11'258.568	212.569
1-jul-21	31-jul-21	622	17,18%	0,06284%	1,92908%	31	25,77%	11'258.568	219.313
1-ago-21	31-ago-21	804	17,24%	0,06303%	1,93515%	31	25,86%	11'258.568	219.997
1-sep-21	30-sep-21	931	17,19%	0,06287%	1,93009%	30	25,79%	11'258.568	212.348
1-oct-21	14-oct-21	1095	17,08%	0,06251%	1,91894%	14	25,62%	11'258.568	98.529
TOTAL INTERESES MORATORIOS TASA COMERCIAL (14/10/2021)									\$ 9'488.744

Recapitulando, por concepto de capital indexado (suma descontada en exceso por concepto de aportes al sistema general de pensiones) la entidad ejecutada le adeuda a la ejecutante la suma de \$11'258.568, por intereses moratorios a la tasa DTF el valor de \$288.697 y por intereses moratorios a la tasa comercial el monto de \$9'488.744, para un total de **\$21'036.009**.

Corolario, de conformidad con el artículo 431 del CGP se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído cancele a la ejecutante el valor de \$21'036.009, y sobre la solicitud de condena en costas a la parte ejecutada se decidirá en la debida oportunidad procesal.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, dispone:

PRIMERO: LIBRAR mandamiento ejecutivo en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y a favor de la señora Luz Dary Rojas Moncada, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.417.525 expedida en Bogotá, por la suma de **veintiún millones treinta y seis mil nueve pesos (\$21'036.009) m/cte**, discriminada en los siguientes conceptos:

1. Por la suma de once millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos (\$11'258.568) m/cte, por concepto de reintegro del mayor valor descontado por aportes al sistema de pensiones sobre los factores salariales adicionales incluidos en el ingreso base de liquidación que fue tenido en cuenta para re-liquidar la pensión de vejez en cumplimiento de las sentencias que sirven de título ejecutivo.

2. Por la suma de nueve millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos (\$9'777.441) m/cte, por concepto de intereses moratorios a la tasa del DTF y a la tasa comercial causados desde día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (15 de julio de 2017) hasta el día anterior a esta providencia (14 de octubre de 2021).

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la parte demandada, a través de su representante legal o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la agente del Ministerio Público delegada ante este Juzgado, y ADVERTIR a la entidad ejecutada que deberá pagar la suma adeudada dentro de los cinco (5) días y podrá formular excepciones de mérito en el término de diez (10) días (arts. 431 y 442 CGP), plazos que correrán simultáneamente y se contarán desde el día siguiente a la notificación de esta providencia, conforme al artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

TERCERO: RECONOCER al Dr. Jairo Iván Lizarazo Ávila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.456.810 expedida en Bogotá, y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 41146 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte ejecutante, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante a folio 11 del expediente.

NOTIFÍQUESE



HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

cc